

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Rama Judicial del Poder Público

JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

REF: ACCIÓN DE TUTELA No. 2023-00032

Accionante: **MIGUEL ANTONIO GUANEME SILVA**

Accionado: **ECOPETROL S.A.**

Procede el despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda para finiquitar el trámite de la **ACCION DE TUTELA** de la referencia.

I. ACCIONANTE

Se trata de **MIGUEL ANTONIO GUANEME SILVA**, quien actúa mediante apoderado en defensa de sus derechos.

II. ACCIONADO

Se dirige la presente **ACCION DE TUTELA** contra **ECOPETROL**.

III. DERECHOS FUNDAMENTALES PRESUNTAMENTE VULNERADOS

Se trata del derecho de **petición**.

IV. OMISION ENDILGADA AL ACCIONADO

Manifiesta que mediante su apoderado el 21 de noviembre de 2022 presentó vía correo electrónico derecho de petición a ECOPETROL solicitando información y documentos.

Expone que hasta la fecha no ha recibido respuesta de fondo a su petición ni le han sido entregados las documentales solicitadas.

Por lo anterior, pide se tutele el derecho invocado ordenando a la entidad accionada dar respuesta a su petición del 21 de noviembre de 2022 y la entrega de copias de los documentos solicitados.

V. TRAMITE PROCESAL

Correspondió por reparto el conocimiento de la presente acción al Juzgado Segundo Civil Municipal de Chía Cundinamarca, quien dispuso remitir a los Jueces del Circuito de Bogotá por corresponder al domicilio del peticionario y lugar donde ocurrió la vulneración y produce sus efectos.

Recibida la tutela por este despacho, se procedió a su admisión y se ordenó notificar a la entidad accionada solicitándole rendir informe sobre los hechos aducidos por el petente.

ECOPETROL S.A. Informa que la petición del actor fue radicada el 13 de enero de 2023 y reiterada el 24 de enero, pero por error de la Oficina de Participación Ciudadana de Ecopetrol se señaló haber recibido el 21 de

noviembre de 2022, así que encontrándose aun dentro de los términos para dar respuesta contestó la petición el 27 de enero de 2023, y puso en conocimiento el traslado dado a la empresa Bawer Company SAS, por lo que no se vulneró el derecho de petición y la tutela debe ser desestimada por prematura.

VI. PROBLEMA JURIDICO

Corresponde al despacho verificar si la omisión de respuesta que se le atribuye a la entidad accionada respecto de la petición presentada por el accionante vulnera el derecho fundamental invocado, o contrario sensu, la defensa planteada da lugar a desechar las pretensiones del actor.

VII. CONSIDERACIONES

VII. 1. La Acción de Tutela constituye un logro alcanzado por la colectividad con ocasión de la expedición de la Constitución Política de 1991, para frenar los desafueros de las autoridades públicas cuando quiera que con hechos u omisiones comprometan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La finalidad de esa acción es lograr que, a falta de vía judicial ordinaria, mediante un trámite preferente y sumario, el Juez ante quien se acuda dé una orden de actuar o abstenerse de hacerlo, tendiente a hacer cesar la vulneración o amenaza de violación denunciada.

El artículo 86 de nuestra Carta magna así lo consagra; También advierte su procedencia contra particulares encargados de la prestación de servicios públicos o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de indefensión o subordinación.

Además, la tutela no procede, cuando existen otros recursos o medios de defensa judicial, así lo establece el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, al disponer que solo es viable cuando se ejercita como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, entendiéndose como tal, sólo el que pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.

Al respecto, de acuerdo con la configuración constitucional, existen dos modalidades de procedencia de la acción de tutela como medio de protección de derechos constitucionales fundamentales: de una parte, como mecanismo principal, si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz al cual pueda acudir en busca del amparo requerido y, de otra parte, cuando exista otro medio de defensa judicial, la tutela actuará como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

VII. 2. Del derecho de petición, la jurisprudencia ha dicho *"...De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, "[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales."*

Frente a la procedencia de la acción de tutela para determinar la vulneración del derecho de petición, la H. Corte Constitucional en sentencia T-084/15 sostuvo: "la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho

de petición de los administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales". (Resaltado del despacho)

De acuerdo con lo anterior, la Corte ha estimado "*que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo*" (Sentencia T-206/18).

Bajo el anterior panorama, recordemos que por disposición del artículo 23 de la Carta Política el derecho de petición es un derecho fundamental autónomo, cuya protección no depende de la vulneración de ningún otro derecho fundamental, así pues, este operador jurídico considera que la falta de una respuesta efectiva a la solicitud del accionante constituye vulneración al derecho de petición.

En punto al contenido de la respuesta, la Corte ha establecido que las autoridades deben resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y lo que no es permitido es que las respuestas sean evasivas o abstractas, como quiera que condena al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos (Sentencia T-369/13)

El derecho de petición es, además de un derecho fundamental per se, una manifestación directa de la facultad de acceso a la información que le asiste a toda persona (art. 20 Const.), así como un medio para lograr la satisfacción de otros derechos, como la igualdad, el debido proceso, el trabajo, el acceso a la administración de justicia, entre otros.

VIII. CASO CONCRETO

En el sub examine, el accionante hace consistir afectación al derecho fundamental de petición toda vez que desde el 21 de noviembre de 2022 radicó petición ante Ecopetrol, para ello adosó junto con el escrito de tutela el documento contentivo de la petición y constancia del recibido por la entidad donde le informa que la solicitud se encuentra en trámite desde el 21 de noviembre con el radicado 03200996 / CON-2023-002479.

ECOPETROL frente al requerimiento del despacho difiere de la fecha en que fue radicada la petición, pues argumenta que fue el 13 de enero de 2023 con reiteración del 24 de enero y no el 21 de noviembre de 2022.

De la documental allegada por la entidad accionada, se encuentra en efecto un correo del 13 de enero de 2023, hora 4:48 pm, de Javier Castelblanco Castro dirigido a la Oficina de Participación Ciudadana de Ecopetrol cuyo asunto es "Derecho de petición", en la misma fecha a las 6:03 pm, el correo del derecho de petición es reenviado de "Notificaciones Judiciales Ecopetrol" a la Oficina de Participación Ciudadana de Ecopetrol.

Igualmente, en correo de fecha 16 de enero de 2023 a la hora de las 17:22 dicha oficina reenvía el correo a Javier Castelblanco Castro donde le indica "*En atención al correo precedente, nos permitimos comunicarle que la misma solicitud fue recibida con anterioridad. Al respecto le informamos que el*

caso se encuentra en trámite desde el día 21-11-2022 con el radicado 03200996 / CON-2023-002479 para su seguimiento."

De lo anterior se puede concluir que, si bien no existe certeza de la fecha en que se radicó inicialmente el derecho de petición que da lugar a la presente acción (noviembre/2022 o enero/2023), lo cierto es que con anterioridad al 13 de enero de 2023 la solicitud había sido recibida y se encontraba en trámite según da cuenta a vuelta de correo la respuesta enviada por Ecopetrol el 16 de enero al correo enviado por el accionante el 13 de enero del mismo año.

Adicional a lo antes expuesto, obsérvese que el poder conferido por el accionante a su apoderado para adelantar las actuaciones administrativas ante Ecopetrol tiene presentación personal que data del 16 de noviembre de 2022.

En ese orden, siendo la radicación de la petición anterior al 13 de enero de 2023, para la fecha en que se presenta la tutela (enero 26/2023) ya se habían vencido los términos legales con que contaba la entidad accionada para ofrecer respuesta a la petición de información y documentos presentada por el accionante.

Ahora bien, Ecopetrol frente al requerimiento del despacho allega captura de pantalla de un correo electrónico de fecha 27 de enero de 2023 cuyo encabezado va dirigido al apoderado del accionante y con el que pretende dar respuesta al derecho de petición que presentara el actor, solicitud encaminada a obtener copia de algunos documentos y una certificación.

Sin embargo, pese a lo anterior, Ecopetrol omitió arrimar al plenario prueba alguna que acredite que en efecto dio respuesta efectiva a la petición del actor y que la misma fue debidamente puesta en conocimiento del peticionario ya que solo lo enuncia, pero no obra prueba del recibido por parte del accionante de tal manera que pudiera tenerse por superada la conculcación iusfundamental de los derechos del señor Miguel Antonio Guaneme.

Recuérdese que acorde con la jurisprudencia, el derecho de petición sólo se ve cabalmente protegido cuando al peticionario se le notifica y da a conocer la respuesta emitida "**Que se emita una respuesta de fondo, precisa, integral y acorde con lo que fue solicitado.** Esto no implica aceptación a lo requerido. Esta respuesta debe darse de manera pronta y oportuna. **La respuesta debe ser puesta en conocimiento o serle notificada al peticionario.**"(Sentencia T-369/13) -Resaltado del despacho.

Por lo tanto y conforme a la jurisprudencia, el derecho fundamental de petición reside en la interposición y su resolución pronta y oportuna de la cuestión, entonces se determina que la vulneración de este se da por la negativa de un agente de emitir respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable, además por no comunicar la respectiva decisión al peticionario.

Recordemos que el art. 14 de la Ley 1755 de junio 30 de 2015, estableció tiempos claros a las entidades para dar respuesta a las distintas modalidades de petición, consignando 15 días para toda petición, 10 días para documentos e información y 30 días para consultas.

Consigna la normativa que, en casos de requerirse tiempo adicional para remitir la respuesta, ello se haría saber al peticionario. La Corte Constitucional ha precisado que la información ha de ser clara y precisa conforme a lo pedido

y resolviendo de fondo la petición así no sea favorable a los intereses del petente, la que ha de ser debidamente notificada. (Sentencia T- 049 de 2009)

Este Despacho considera que en efecto existe vulneración al derecho fundamental de petición, pues aun cuando la entidad accionada pretendió expedir una respuesta a lo solicitado por el señor Miguel Antonio Guaneme, lo cierto es que no acreditó de manera alguna haber contestado de fondo la petición y su notificación en debida forma, encontrándose el actor aún a la espera de una respuesta a su petición.

En ese orden y según la norma antes citada, el término legal con que contaba la entidad para brindar respuesta oportuna sin transgredir los derechos fundamentales del accionante se encuentra vencido, por tanto, no existiendo excusa de omisión de respuesta ni mucho menos prórroga de término, dicho acto conlleva a la afectación de los derechos fundamentales del tutelante como lo es su derecho de petición.

Así las cosas, se concederá el amparo del derecho fundamental de petición suplicado por el actor dentro del presente trámite constitucional, toda vez que no se acreditó por la accionada haber dado respuesta y su correspondiente notificación al accionante.

IX. DECISION

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **RESUELVE:**

PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho de petición deprecado mediante apoderado judicial por el señor **MIGUEL ANTONIO GUANEME SILVA**, por lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: ORDENAR a ECOPETROL S.A. para que, a través de la dependencia y funcionario respectivo, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia proceda a resolver de fondo bien sea positiva o negativamente el derecho de petición que presentara el accionante ante la entidad.

Respuesta que debe ser emitida en los términos indicados en este fallo y dentro de la órbita de su autonomía, es decir, esta sentencia de tutela no sugiere el sentido de la respuesta que se ha de producir, pero la contestación ha de ser de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, decisión que debe notificársele prontamente y en debida forma al petente.

TERCERO: ORDENAR que, por secretaría, se notifique este fallo a las partes, indicándoles que tienen tres (3) días para impugnarlo.

CUARTO: DISPONER la remisión oportuna del expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo. **Ofíciase.**

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

WILSON PALOMO ENCISO

ET

JUEZ

Firmado Por:
Wilson Palomo Enciso
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 012
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **26cf6c5f9bf0fc8c5dfc79e1e643d35a0e5bb25ce69c0489612d8d219d4c1626**

Documento generado en 08/02/2023 05:22:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>